

En los casos a que se refiere el párrafo anterior dichos efectos traslativos no deben entenderse producidos con posterioridad al momento en que el comerciante adquirente efectúe la reventa de los bienes depositados.

En las entregas sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial por los importes efectivamente cobrados.

Séptimo.—Las facturas correspondientes a las operaciones sujetas al Impuesto deberán ser emitidas en el mismo momento del devengo de la cuota correspondiente a cada una de las operaciones gravadas, o bien cuando el destinatario sea empresario o profesional, dentro del plazo de treinta días a partir de dicho momento, o del último día del mes natural cuando se incluyan en una sola factura las operaciones realizadas para un mismo destinatario en el plazo máximo de un mes natural.

Toda factura deberá ser remitida a su destinatario en el mismo momento de su expedición o cuando el destinatario sea empresario o profesional, dentro de los treinta días siguientes.

Madrid, 27 de octubre de 1986.—El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

**30104** RESOLUCION de 29 de octubre de 1986, de la Dirección General de Seguros, por la que se acuerda que la Comisión liquidadora de Entidades Aseguradoras asuma la función de liquidador en la Entidad «Unión Andaluza, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros Generales».

Ilmo. Sr.: Vista el acta levantada por la Intervención del Estado en la Entidad «Unión Andaluza, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros Generales», en la que se señala, que a pesar de haber transcurrido el plazo fijado en el apartado cuarto de la Orden de 3 de junio de 1986, la Entidad no ha nombrado liquidadores; concurriendo en la liquidación de la misma la circunstancia prevista en el apartado c) del artículo segundo del Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 14), circunstancia igualmente contemplada por el apartado c) del artículo séptimo del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre), y una vez cumplido el trámite previsto en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 31.7 b) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, y 92.3 y 97.3 de su Reglamento, este Centro ha acordado que la Comisión liquidadora de Entidades Aseguradoras asuma la función de liquidador de la Entidad «Unión Andaluza, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros Generales», al estar la misma incurso en el supuesto previsto en el apartado c) del artículo séptimo del citado Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

Madrid, 29 de octubre de 1986.—El Director general, Pedro Fernández Rañada de la Gándara.

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

**30105** RESOLUCION de 29 de octubre de 1986, de la Dirección General de Seguros, por la que se acuerda que la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras asuma la función de liquidador en la Entidad «Europa, Sociedad Anónima, Compañía Española de Capitalización».

Vistas las actas levantadas por la Intervención del Estado en la Entidad «Europa, Sociedad Anónima, Compañía Española de Capitalización», en las que se señala que la liquidación de la misma se encuentra incurso dentro de los supuestos contemplados en el artículo 97.2 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, al resultar el activo de la Entidad, en liquidación, inferior a su pasivo; por lo que procede, en consecuencia, que la liquidación de la Entidad sea asumida por la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, y una vez cumplido el trámite previsto en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo sin que las alegaciones formuladas por la Entidad interesada deriven las referidas situaciones.

Este Centro ha acordado que la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras asuma la función de liquidador de la

Entidad «Europa, Sociedad Anónima, Compañía Española de Capitalización», por estar la misma incurso dentro de los supuestos previstos en el artículo 97.2 del citado Reglamento de 1 de agosto, supuestos igualmente contemplados por el artículo 7.º del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, esta Dirección General ha acordado que todos los contratos que componen la cartera de «Europa, Sociedad Anónima, Compañía Española de Capitalización», vengzan a la fecha de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de octubre de 1986.—El Director general, Pedro Fernández Rañada de la Gándara.

Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

**30106** RESOLUCION de 29 de octubre de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 25 de junio de 1986, por el que el Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Madrid formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecha 25 de junio de 1986, por el que el Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Madrid, formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que el Colegio profesional consultante está autorizado para formular consultas vinculantes en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que eventualmente se pueden producir circunstancias que determinen la interrupción de los servicios prestados por los Aparejadores por desacuerdo con los clientes y antes de la finalización del contrato;

Resultando que, en tales casos, la otra parte contratante debe satisfacer al profesional una indemnización correspondiente al perjuicio o pérdida que al profesional se le produce por la rescisión del contrato;

Resultando que se consulta si las referidas indemnizaciones forman parte de la base imponible de operaciones sujetas al impuesto;

Considerando que el artículo 3.º de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido («Boletín Oficial del Estado», del 9), establece que están sujetas al citado tributo las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas por los empresarios o profesionales a título oneroso en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional;

Considerando que el artículo 17 de dicha Ley preceptúa que la base del Impuesto está constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo;

Considerando que según preceptúa el número 2, apartado 5.º del citado artículo se incluyen en el concepto de contraprestación las percepciones retenidas con arreglo a derecho por el obligado a efectuar la prestación en los casos de resolución de las operaciones sujetas al Impuesto;

Considerando que el número 3, apartado 1.º del mismo artículo establece que no se incluirán en la base imponible las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el número anterior, que por su naturaleza o función no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto;

Considerando que el artículo 25 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria («Boletín Oficial del Estado» del 31), establece que el Impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho imponible.

Esta Dirección considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta formulada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Madrid:

No se incluirán en la base imponible de los servicios profesionales prestados por los Aparejadores las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones que por su naturaleza y función no constituyan contraprestación o compensación de las operaciones sujetas al Impuesto, distintas de las percepciones retenidas con arreglo a derecho por los referidos profesionales en los casos de resolución de las operaciones sujetas al mismo.

La determinación de la naturaleza y función de las indemnizaciones a percibir por los Aparejadores en los casos de rescisión de

los contratos celebrados con sus clientes deberá efectuarse, en cada caso, en función de los pactos existentes y de las demás circunstancias que concurran.

Madrid, 29 de octubre de 1986.—El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

**30107** *RESOLUCION de 29 de octubre de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de 25 de junio de 1986, por el que la Asociación de Líneas Aéreas de España formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.*

Visto el escrito de fecha 25 de junio de 1986, por el que la Asociación de Líneas Aéreas de España formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la referida Asociación es una organización patronal autorizada para formular consultas vinculantes referentes a dicho tributo en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 28 de diciembre);

Resultando que la consulta tiene por objeto determinar si las Compañías de Navegación Aérea están autorizadas a deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por los servicios de alojamiento de sus tripulaciones en hoteles ubicados en el territorio español, o por los desplazamientos de dichas tripulaciones desde el aeropuerto al hotel y viceversa;

Resultando que la Asociación consultante manifiesta que los gastos indicados son necesarios para el desarrollo de las actividades empresariales de las citadas Compañías;

Considerando que el artículo 33, número 1, apartados 2.º y 3.º de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido («Boletín Oficial del Estado» de 9 de agosto), establece que no podrán ser objeto de deducción:

2.º Las cuotas soportadas por los servicios de desplazamiento o viajes del propio sujeto pasivo, de su personal o de terceros, incluso los relacionados con la actividad empresarial o profesional.

3.º Las cuotas soportadas (...), por los servicios de hostelería, restaurante o espectáculos, excepto cuando se destinen a ser utilizados o consumidos por los asalariados o por terceras personas mediante contraprestación.»

Considerando que los servicios de hostelería a que se refiere el escrito de consulta no se reciben por las Compañías de Navegación Aérea para ser cedidos a sus asalariados en virtud de operaciones sujetas al impuesto y mediante una contraprestación que deben satisfacer dichos asalariados a las Compañías,

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta formulada por la Asociación de Líneas Aéreas de España:

Las Compañías de Navegación Aérea no podrán deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por los servicios de alojamiento de sus tripulaciones en hoteles ubicados en el territorio peninsular español o las islas Baleares, ni por los desplazamientos de dichas tripulaciones desde los aeropuertos a los hoteles o viceversa.

Madrid, 29 de octubre de 1986.—El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

**30108** *RESOLUCION de 29 de octubre de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 30 de junio de 1986, por el que Comisiones Obreras formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.*

Visto el escrito de fecha 30 de junio de 1986, por el que Comisiones Obreras formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la Entidad consultante es una organización sindical autorizada para formular consultas vinculantes relativas al citado tributo en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 28 de diciembre);

Resultando que la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, por encargo expreso de sus Federaciones, dotadas de personali-

dad jurídica propia, adquiere bienes y recibe servicios que, posteriormente cede a dichas Federaciones;

Resultando que la citada Confederación es titular o, en su caso, arrendataria de edificios cuyo uso cede a las diversas Federaciones, soportando los gastos comunes que, posteriormente, repercute a las respectivas Federaciones;

Resultando que la citada Confederación ha contratado con la Compañía Telefónica Nacional de España los servicios necesarios para prestar un servicio de intercomunicación confederal, adquiriendo para ello los correspondientes teleimpresores por cuenta de sus Federaciones.

I referida Confederación ha recibido, asimismo, mandamientos expresos de cada una de las Federaciones para hacer frente, de manera global, a las sumas giradas por los proveedores;

Resultando que se consulta si las sumas satisfechas por la referida Confederación en interés de las Federaciones que la integran y, en virtud de mandato expreso de las mismas, tienen la consideración de suplidos en nombre y por cuenta de las Federaciones citadas no sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Considerando que el artículo 3.º de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido («Boletín Oficial del Estado» de 9 de agosto), establece que están sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

A los efectos de dicha Ley, se asimilan a las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a título oneroso las prestaciones sin contraprestación comprendidas en los artículos 6.º, número 3, y 7.º, número 3, de dicha Ley.

La sujeción al Impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular;

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.º de la misma Ley, a los efectos del Impuesto se considerarán empresarios o profesionales las personas o Entidades que realicen habitualmente y por cuenta propia actividades empresariales o profesionales, y que se reputarán en todo caso empresarios o profesionales a quienes efectúen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo;

Considerando que, a tales efectos, es indiferente que las entregas de bienes se efectúen o los servicios se presten a los propios asociados, miembros, socios o partícipes de las Entidades que las realicen;

Considerando que el artículo 13, número 1, apartado 6.º, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 31 de octubre), establece que están exentos del Impuesto los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades constituidas por personas físicas o jurídicas que ejerzan esencialmente una actividad exenta o no sujeta al Impuesto cuando concurran las siguientes condiciones:

- Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean necesarios para el ejercicio de la misma.
- Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les corresponda en los gastos hechos en común.
- Que se reconozca previamente el derecho de los sujetos pasivos al disfrute de la exención en la forma prevista en el número 2 de dicho artículo.

Se entenderá a estos efectos que los miembros de una Entidad ejercen esencialmente una actividad exenta o no sujeta al Impuesto cuando el volumen total anual de las operaciones efectivamente gravadas por el Impuesto no exceda del 10 por 100 del total de las realizadas.

La exención no alcanza a los servicios prestados por las Sociedades mercantiles;

Considerando que el artículo 29 del mismo Reglamento establece que la base imponible del Impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas;

Considerando que el artículo 31 del mismo Reglamento preceptúa que en las operaciones cuya contraprestación no consista en dinero se considerará como base imponible la contraprestación que se hubiese acordado en condiciones normales de mercado, en la misma fase de producción o comercialización, entre partes que fuesen independientes;

Considerando que el artículo 29, antes citado, número 3, apartado 3.º, del Reglamento del Impuesto dispone que no se incluirán en la base imponible las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente, en virtud de mandato expreso del mismo, que figuren contabilizadas por quien entregue los bienes o preste los servicios en las correspondientes cuentas específicas. El sujeto